FERNANDO VII, REY *PLENO*
POR LA GRACIA DE DIOS.
DEFINICIÓN Y MARCO JURÍDICO DEL “DELITO
POLÍTICO” EN SU REINADO 1808-1833

FERNANDO VII, ABSOLUTE KING BY THE GRACE OF GOD.
DEFINITION AND LEGAL FRAMEWORK OF “POLITICAL CRIME”
IN HIS REIGN 1808-1833

DIEGO HINOJAL AGUADO

(UNED) - Investigador en formación en la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED, Programa de Doctorado en Unión Europea.

Sumario: *Introducción. I. Fernando VII Rey Pleno por la Gracia de Dios. II. Los delitos políticos durante su reinado. III. La represión de los delitos políticos. IV. Conclusiones. V. Fuentes Archivísticas y Bibliográficas.*

Resumen: En el marco de un estudio más extenso, resaltamos la figura del monarca Fernando VII y la defensa a ultranza de su soberanía absoluta, en una etapa de crisis de la monarquía marcada por el tránsito hacia el nuevo Estado liberal. La represión definirá su reinado en un intento de erradicar el Liberalismo por todos los medios tradicionales y también algunos nuevos. Porque, para el absolutismo fernandino, los defensores del *sistema constitucional* eran considerados como los peores criminales para el Trono y el Altar, y *reos del crimen de lesa Magestad humana y divina*. En su persecución no sólo se empleó la Justicia del Rey, sino que tuvieron gran protagonismo las jurisdicciones especiales eclesiástica y militar. Finalmente, y después de superar las reformas promovidas durante los lapsos liberales de su reinado, gracias a la concentración de poder en manos del monarca,

la represión de los delincuentes políticos fue dirigida desde palacio. Labor en la que destacaron, siguiendo los dictados del monarca absoluto, la Secretaría o ministerio de Gracia y Justicia, la Superintendencia General de Policía del Reino y la difusión de una legislación represiva, vía Real decreto.

Palabras clave: Delito político, Fernando VII, Absolutismo, Liberalismo, Represión.

Abstract: We highlight the figure of the monarch Ferdinand VII and the staunch defense of his absolute sovereignty in a period of crisis for the monarchy marked by the transition to the new liberal State. The repression will define its reign in an attempt to eradicate Liberalism by all traditional methods and also some new ones. At the Ferdinand's Absolutism, the defenders of the constitutional system were considered as the worst criminals for the *Throne* and the *Altar*, and guilty of the crime of *lesa Magestad humana y divina*. In his persecution, special ecclesiastical and military jurisdictions played a leading role, because of the crisis of King's Justice. Finally, and after overcoming the reforms promoted during the liberal periods of his Reign, thanks to the concentration of power in the hands of the monarch, the repression of political criminals was conducted from the palace. Where the Ministry of Grace and Justice, the General Police Superintendence of the Kingdom and the dissemination of repressive legislation had all the leadership.

Keywords: Political Crime, Ferdinand VII, Absolutism, Liberalism, Repression.

Recepción original: 06/02/2022

Aceptación original: 17/03/2022

Llegamos, por fin, al exámen de otra clase de reos, que ha sido muy numerosa en estos últimos tiempos, cuanto mas frecuentes han sido también las ocasiones para delinquir, en unas épocas en que los gobiernos han tenido que castigar los mismos delitos de que los gobernantes no se hallaron exentos á su vez. En una época en que los partidos vencedores han hecho sufrir á los vencidos unas represalias que las circunstancias justificaban, a pesar del espíritu de equidad con que se procuraba ocultar las mas pequeñas venganzas, nada estraño es que el número de reos políticos fuera mas considerable. Sin contar la pena de muerte, que de medio siglo á esta parte ha ofrecido cuadros demasiado frecuentes para que se olvide todavía su memoria, no son los presidios los que menos número de víctimas han recibido por espacio de muchos años. "Los crímenes contra la seguridad del Estado y contra la persona del soberano

no tienen muy funestas consecuencias”, decía en la tribuna francesa un orador ministerial; son incalculables los perjuicios que puede producir la simple tentativa de estos crímenes...

... ¿por qué cuando los vencedores declaran reos á los vencidos, les han de considerar como asesinos infames? ¿No es esto perpetuar una serie de represalias que no tendrán fin en mucho tiempo, porque en mucho tiempo no se consolidará la paz de la Europa? ¿cómo? ¿antes de llegar á los honores se puede ser conspirador, se puede atacar al gobierno constituido, se pueden eludir sus disposiciones, se puede ser criminal; y obtenidos aquéllos, todos estos pasos han de ser tenidos por criminales y pecaminosos! Tú, partido ciego que venciste ¿por qué declaras reos á tus contrarios, cuando les obligas á adorar al mismo que fue conspirador contigo, y hoy le elevas en tus altares? ...

... que esta clase de reos exige unos miramientos que á los reos comunes no le es dado dispensar: que ni era decoroso confundirles en traje, ni en trabajo; porque no puede prever si el que allí entró proscrito, humillado y pobre, presentará despues estos harapos para colgarlos al lado de sus condecoraciones cuando triunfen sus principios!

Vicente Boix, 1850¹

INTRODUCCIÓN

Con el texto inicial pretendemos hacer reflexionar sobre la visión que tenía la sociedad liberal del siglo XIX, sobre la gravedad de la persecución que habían sufrido algunos coetáneos suyos al final del denominado *Antiguo Régimen*. Esta reflexión se hace necesaria porque la mayor parte de lo que hasta ahora conocemos sobre la represión producida en el reinado de Fernando VII, nos ha llegado en gran parte de las memorias justificativas o historias sobre los *héroes* o *mártires* del Liberalismo, escritas o publicadas en el *Nuevo Régimen*, por los que sobrevivieron al último de los reyes *por la Gracia de Dios*, con el riesgo de parcialidad que conlleva su utilización. Todo ello provocado por la pérdida y dispersión de documentación primaria, que ha dificultado el estudio del reinado de Fernando VII, y que se ha paliado con la utilización de esas crónicas o memorias publicadas con el triunfo del Liberalismo.

Para el presente trabajo nos hemos centrado en la figura del monarca Fernando VII y en la represión que se generalizó para recupe-

¹ BOIX, Vicente, *Sistema penitenciario del presidio correccional de Valencia*, Imprenta del Presidio, Valencia, 1850, págs. 204-208. El autor, cronista de la ciudad de Valencia, dedica la obra sobre el sistema penitenciario valenciano al General Narváez el 8 de julio de 1850.

rar su soberanía absoluta tras las experiencias constitucionales. Por dicho motivo, en la primera parte nos centramos en la influencia desconfiada, timorata y vengativa del Rey, que se advierte en la extensión de la nueva legislación que sin romper con la penalidad del llamado Antiguo Régimen, a través de reales decretos, se multiplicó a petición del monarca para erradicar a los delincuentes políticos, a los que consideraba muy perjudiciales para los intereses de su corona.

En la segunda parte, recorreremos su reinado para advertir el cambio en la consideración que tuvo la delincuencia política provocada por los cambios en el Estado: Los traidores o infidentes *Afrancesados* que colaboraron con el gobierno *Intruso* de José Bonaparte durante la ocupación napoleónica; los *reos de lesa majestad humana* y también *divina* que habían sido influidos por las nuevas ideas revolucionarias tan contrarias a la soberanía total del monarca, y eran considerados herejes por la Iglesia; los delincuentes de Estado, que en los periodos de gobierno liberal atacaron la Constitución, las Cortes y el Estado; y finalmente, la generalización de la represión que se empleó contra cualquier ataque que el Rey considerara lesivo hacia su total soberanía.

En la tercera parte se atiende al aparato institucional y jurisdiccional de la monarquía empleado en gran parte para erradicar el Liberalismo, a pesar de los graves conflictos de competencias generados, en los que la jurisdicción castrense salió reforzada. Tras recibir la ayuda exterior de los Cien Mil Hijos de San Luis, Fernando VII institucionalizó su régimen gracias a la concentración de poder en su gabinete. Por dicho motivo, las *Secretarías de Estado y del Despacho* tuvieron gran protagonismo en la erradicación del sistema constitucional, destacando la actuación de Gracia y Justicia, y sus reales decretos adaptados a las exigencias del Rey.

Finalmente, llegamos a las preceptivas conclusiones y a las fuentes empleadas. Advirtiendo que la dispersión y eliminación de documentación relacionada, ha dificultado el estudio de la represión política en el primer tercio del siglo XIX. Por dicho motivo, gran parte de los trabajos de investigación basados en fuentes secundarias han fomentado aún más si cabe, la negativa imagen del reinado de Fernando VII. Sin embargo, la persecución de los *delincuentes políticos* alcanzó unas cotas, por las que es fácilmente percibida hasta en la documentación local, a pesar de la falta de la mayor parte de las causas políticas por su expurgo continuado.

A lo largo del estudio hemos podido comprobar como el Rey Fernando VII utilizó los medios que tenía a su alcance, conspiró y

presionó para perseguir y castigar a los considerados como peores delincuentes para sus sagradas persona y corona, que la divina providencia le había otorgado. Las nuevas ideas produjeron un cambio en la concepción del Estado, fomentando la libertad del individuo y el fin del despotismo con la separación de poderes, muy contrarios a sus intereses y pensamiento.

I. FERNANDO VII, *REY PLENO POR LA GRACIA DE DIOS*

A la delincuencia común, robos, asesinatos, delitos de índole sexual, el fraude y el contrabando, los motines por crisis de subsistencias etc., se une una nueva forma de contestación al poder establecido de difusos límites en sus inicios. Esta delincuencia denominada más tarde política, provocó un cambio en la percepción de la Corona, por su gravedad, modificando los medios para combatirla². Según Francisco Tomás y Valiente estos delitos son, *los que el rey se siente personalmente ofendido. Todo lo que perjudique, lesione o atente contra los intereses de la Monarquía, se estima lesivo contra la majestad personificada: el Rey*³. En palabras de la época, *crímenes de Lesa Magestad humana* y a veces *divina* también, por la condición mixta existente en la figura del monarca y en este tipo de delitos. En los que la condición humana era la traición, *infidencia* o deslealtad al rey, y la condición divina era la herejía. Lo que explica, la confusión entre las jurisdicciones eclesiástica o Inquisitorial y la Real, y que la represión o persecución de estos delitos, inicialmente estuviera en manos de la primera, a causa de la consideración herética de las ideas liberales.

Fernando VII rey deseado y detestado, desde su infancia recibió una formación marcada por el odio, el miedo, o la desconfianza, lo que se traducirá en su espíritu profundamente cobarde, desleal y vengativo⁴. Sin embargo, utilizó la propaganda de forma notable para mantenerse en el poder, a pesar de los graves problemas que tuvo que afrontar para perpetuar su régimen. Actuó con una doblez extrema que sufrieron sobre todo los liberales, propiciando la negativa ima-

² MARTÍNEZ RUÍZ, Enrique, "Policía, Delincuencia Política y Corrupción en Madrid a finales del siglo XVIII", *Madrid. Revista de arte, geografía e historia*, N.º 8, 2006, págs. 57-86; también en *La Seguridad Pública en el Madrid de la Ilustración*, Ministerio del Interior, Madrid, 1988; y *Policías y Proscritos. Estado, Militarismo y Seguridad en la España Borbónica (1700-1870)*, Editorial Actas, Madrid, 2014.

³ TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, "Derecho penal de la Monarquía absoluta (S. XVI, XVII y XVIII)", *Obras Completas*, CEPC, Madrid, 1997, Tomo I, pág. 361.

⁴ LA PARRA LÓPEZ, Emilio, *Fernando VII. Un rey deseado y detestado*, Tusquets, Barcelona, 2018, págs. 59-67.

gen posterior de *Rey detestado* o *Rey Felón*. Por un lado, hacía gala de clemente, incluyendo en sus decretos textos como el siguiente: *Imitad el ejemplo de vuestro REY, que perdona los extravíos, las ingratitudes y los agravios sin mas excepciones que las que imperiosamente exigen el bien público y la seguridad del Estado*⁵, pero si una palabra definió su reinado, fue la de *represión*.

Fue el primer Monarca que reinó en España por la gracia de Dios y de la Constitución, breve tiempo y malamente, fué el deseado Fernando VII, el más popular de cuantos reyes gobernaron a la nación española⁶, De todos los Austrias y Borbones que con mayor o menor fortuna reinaron en España, no hubo ninguno más deseado y popular, ni que dejase más ominoso recuerdo que el VII Fernando⁷. Sin embargo, pese a todo lo escrito sobre su reinado, tuvo el apoyo del pueblo desde su irrupción en escena en la Guerra de la Independencia, circunstancia que explica los vaivenes ocurridos en su reinado y su permanencia en el trono pese a pronunciamientos de uno y otro signo⁸.

Su soberanía, será objeto de defensa a ultranza o de ataque a favor de la división de poderes. A lo largo de su reinado, las excepciones incluidas en los indultos decretados ante eventos señalados, como bodas y nacimientos en la familia real, nos indican cuales eran los peores delitos para el monarca. Nunca perdonaría a los causantes de la merma de sus prerrogativas. Ya que una y otra vez se reiteraba que *los reos de crimen de lesa Magestad divina o humana*, no se encontraban entre los indultados, aunque esto era común en el Antiguo Régimen⁹.

Por dicho motivo, el carácter vengativo del monarca se aprecia mejor en la abundante legislación promovida para la represión del liberalismo. Entre la que podemos incluir, la *Real cédula de SM. y Señores del Consejo, por la cual se concede indulto y perdon general, con*

⁵ NIEVA, Josef María, *Decretos del Rey Nuestro Señor Fernando VII*, Imprenta Real, Madrid, 1824, Tomo VIII, págs. 331-332, Real cédula de 01-05-1824.

⁶ MARTÍNEZ DE VILLAUURUTIA, Wenceslao, *Fernando VII Rey Constitucional*, Librería Beltrán, Madrid, 1922, pág. 8.

⁷ MARTÍNEZ DE VILLAUURUTIA, Wenceslao, *Fernando VII Rey Absoluto*, Librería Beltrán, Madrid, 1931, pág. 214.

⁸ MORENO ALONSO, Manuel, "La Fabricación de Fernando VII", *Ayer*, N.º 41, 2001, págs. 19-30.

⁹ En el Antiguo Régimen el indulto era un arma de poder de los monarcas absolutos, y era negado para los crímenes de *Lesá Magestad divina o humana*. Incluso en los periodos constitucionales del reinado existen ejemplos de continuidad, como ocurre con los Decretos XII de 21-11-1810, CLXV y CLXVI de 25-05-1812, LXXXVII de 3-05-1814. En el Código Penal de 1822 se adaptará la noción de *crímenes de Lesá Magestad* a los nuevos tiempos como crímenes de Estado, pero tampoco existía la posibilidad del indulto.

*revelacion de las penas corporales ó pecuniarias en que hayan podido incurrir, á todas las personas que desde principios del año de 1820 hasta el dia .º de Octubre de 1823 hayan tenido parte en los excesos y desórdenes ocurridos en estos Reinos con el objeto de sostener y conservar la pretendida constitucion de la Monarquía, con tal que no sean de las que se mencionan y exceptúan en el Real decreto inserto*¹⁰. El indulto y perdón general de mayo de 1824, parecía más una lista de causas contra los promotores del liberalismo, que una norma emanada de la clemencia del rey, porque desde el inicio nos informa de la existencia de graves penas para los revolucionarios.

En el llamado libro verde, Fernando VII había incluido su particular lista negra, que parece resumirse en las excepciones del perdón general. En el artículo segundo se incluían quince excepciones que calificaban a los que consideraba como peores delincuentes. Se trataba de los hechos en los que el monarca se había sentido más ofendido, cuando había tenido que ceder su soberanía ante los revolucionarios de 1820, y había tenido que jurar la Constitución de Cádiz. Incluso se llegó a responsabilizar *con sus personas* a los oficiales encargados de la custodia de los *reos de Estado* excluidos de la amnistía, si éstos conseguían escapar de sus prisiones¹¹.

Por citar otro ejemplo, incluso en momentos de debilidad del rey, en la Real cédula de 20 de octubre de 1832, decretada por la Reina Gobernadora, *por la cual se concede la amnistía mas general y completa, de cuantas hasta el presente han dispensado los Reyes, á todos los que han sido hasta aqui perseguidos como reos de Estado, con sola la excepcion que se expresa*, se confirma, que mientras viviera Fernando VII no existiría perdón para *...los que tuvieron la desgracia de votar la destitucion del REY en Sevilla, y los que han acaudillado fuerza armada contra su soberanía*¹².

Finalmente, Fernando VII gobernó a fuerza de decretos para agilizar la represión en momentos críticos, como ocurre durante los años 1824 y 1825, y sobre todo ante los movimientos revolucionarios de 1830. Por citar de nuevo al Marqués de Villa-Urrutia, *mantener su régimen absoluto a base de crueldad y violencia, sustituyendo la ley por el decreto, expresión del soberano antojo, al que estaban sometidos los fallos de los Tribunales de justicia y del que dependían la vida, liber-*

¹⁰ NIEVA, *Decretos Fernando VII*, 1824, op. cit., págs. 325-333, Real cédula de 01-05-1824.

¹¹ *Ibidem*, pág. 370, Real orden de 24-05-1824.

¹² NIEVA, Josef María, *Decretos del Rey Nuestro Señor Fernando VII*, Imprenta Real, Madrid, 1833, Tomo XVII, pág. 224, Real cédula de 20-10-1832.

*tad y hacienda de los maltrechos y esquilados españoles, era la única preocupación de Fernando VII*¹³.

II. DELITOS POLÍTICOS EN EL REINADO DE FERNANDO VII

Delito político no fue una expresión incluida en recopilaciones legislativas del Antiguo Régimen, y tampoco fue utilizada durante el reinado de Fernando VII, a excepción de contadas ocasiones en los lapsos liberales. Se ha decidido su utilización en el presente trabajo para un mejor entendimiento, aunque se trata de algo bastante indeterminado y de difícil delimitación, sobre todo para el siglo XIX. Sin embargo, el estudio de los orígenes de estas amenazas al poder establecido y sus primeras respuestas facilita la comprensión de hechos actuales, y de las diversas consideraciones políticas y sociales que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Por otra parte, nos encontramos en el estudio de los orígenes de las intolerancias, sobre todo políticas, que han marcado la historia del siglo XIX en España, llegando incluso algunos de sus efectos negativos hasta la actualidad.

Los conflictivos inicios del reinado generaron una amplia división de la sociedad española. El rey a la cabeza del *partido* contrario a Godoy se hizo con la corona de su padre Carlos IV, para entregársela al intrigante Napoleón. Después fue cedida al hermano del emperador, José Bonaparte. Y finalmente devuelta a Fernando VII, en una larga guerra que los *patriotas* libraron en su nombre, *el Deseado*. Tras conseguir su libertad desde su encierro en Valençay de acuerdo con Napoleón, y regresar a España, esos patriotas vencedores pretendieron obligarle a aceptar la revolución que significaba la Constitución de Cádiz: el fin del Antiguo Régimen. Algo que era totalmente contrario a lo que el monarca entendía que la providencia divina le había otorgado: el gobierno absoluto.

La lucha por la implantación definitiva del Liberalismo en España marcará y definirá, esos cambios de consideración que sufrirá la delincuencia política, en las diversas etapas de su reinado. La traición o *infidencia* de los *Afrancesados* durante la Guerra de la Independencia, se convirtió en *crimen de lesa Majestad* con el regreso del absolutismo, pero durante el Trienio Liberal fue transformada en delitos de Estado.

¹³ MARTÍNEZ DE VILLARRUTIA, *Fernando VII Rey Absoluto*, op. cit., pág. 123.

II.A. *Afrancesados y patriotas liberales*

Afrancesado y *afrancesamiento* son conceptos tan difíciles de definir como el de delito político, sin embargo, durante la Guerra de la Independencia se configuraron como la personificación misma de la traición, a pesar de que se puede considerar al monarca, como el primero de ellos¹⁴. Fernando VII, abandonó España en abril de 1808 en lo que pensaba sería una corta ausencia para dar a Napoleón *una prueba convincente del alto aprecio que hago de su augusta persona, y de los vivos deseos que me animan de consolidar mas y mas los vínculos de amistad y estrecha alianza...*, ordenando que no se turbara ni alterara *la tranquilidad, buena armonía y ventajosa alianza* con los franceses¹⁵. Pero no regresaría hasta casi seis años después, y fue gracias al interesado tratado de Valençay, firmado 11 de diciembre de 1813 con el emperador. Por el que debía respetar a los españoles que habían seguido a José Bonaparte¹⁶.

En su ausencia se produjo el alzamiento y revolución que ocupó el vacío de poder producido por la crisis de la monarquía. Por ello, las primeras medidas contra los colaboradores con el *rey intruso* fueron tomadas sobre sus pertenencias, familia y entorno, por el pueblo de Madrid, cuando José I abandona la capital tras la derrota francesa en Bailén. Una vez reunidas las Cortes en Cádiz, se discutieron las medidas a tomar contra los afrancesados por el problema de los *juramentados*, los que habían jurado fidelidad a José I por miedo a las represalias, porque si no se legislaba con cuidado, podrían recibir castigo todos los vecinos de los territorios ocupados. Sin embargo, estas medidas dirigidas contra los colaboracionistas fueron empleadas para supuestos muy diversos, y se aprovecharon de la penalidad tradicional¹⁷.

En el indulto militar concedido el 21 de noviembre de 1810, por la instalación de las Cortes, se perdonaba a los desertores que se presentaban en tres meses, pero no se perdonaba la infidelidad cometida por los seguidores del gobierno intruso¹⁸. Asimismo, por Orden de las

¹⁴ ARTOLA, Miguel, *Los afrancesados*, Alianza Editorial, Madrid, 2008, pág. 58; DOMÍNGUEZ NAFRÍA, Juan Carlos, "El trato a los Afrancesados en la Legislación de las Cortes de Cádiz", en ALVARADO PLANAS, Javier (Coord.), *Estudios Sobre Historia de la Intolerancia*, Sanz y Torres, Madrid, 2011, págs. 573-596.

¹⁵ *Gazeta Extraordinaria de Madrid*, N.º 33, 09-04-1808, pág. 359.

¹⁶ ARTOLA, *Los afrancesados*, op. cit., págs. 231-233.

¹⁷ FIESTAS LOZA, Alicia, *Los Delitos Políticos (1808-1936)*, G. Cervantes, Salamanca, 1977, pág. 55.

¹⁸ *Colección de Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de*

Cortes de 14 de julio de 1811, se prevenía a *las Audiencias de la península, que procedan en las causas de infidencia con la brevedad posible, castigando á los reos sin dilacion alguna, y sin necesidad de consultar las sentencias de muerte, en uso de las facultades que las competen por las leyes*¹⁹.

Después de la promulgación de la Constitución en 1812 se produjeron las primeras purificaciones políticas de afrancesados²⁰. Por los decretos de 11 de agosto y de 21 de septiembre de 1812, se dictaron las medidas para cesar a empleados, servidores, jueces, y beneficiados eclesiásticos nombrados por el *Gobierno intruso, y para asegurar la confianza de la Nación respecto de los empleados y otras personas públicas*. Estas medidas no impedían que se formase causa judicial por la conducta política que habían seguido los purificados. Aunque se incluía la remota posibilidad de rehabilitación por un decreto general, para los no castigados *con pena corporal o infamatoria*²¹,... y se hubiesen mantenido fieles a causa de la Nación²².

Con el fin de la guerra y la vuelta de Fernando VII en 1814, se complicó aún más la escena, porque el monarca no iba a permitir recortes en su gobierno. El apoyo recibido desde su llegada a la frontera por el sector realista, y en general por el pueblo llano, le decidieron a terminar con la obra liberal de las Cortes de Cádiz. Así, en el famoso manifiesto de 4 de mayo de 1814 declaró *aquella Constitucion y tales decretos nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamas tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo... Y como el que quisiese sostenerlos, y contradigere esta mi Real declaracion, tomada con dicho acuerdo y voluntad, atentaria contra las prerogativas de mi soberanía y la felicidad de la nacion, y causaríá turbacion y desasosiego en mis reinos, declaro reo de lesa Mage-*

1811, Imprenta Nacional, Madrid, 1813, Tomo I, págs. 20-26.

¹⁹ *Ibidem*, pág. 166. En AHN, Consejos 17781-17783, 49642-49644, y 49809-49810 se encuentran 175 Expedientes de afrancesados que emigraron a Francia. En los archivos que albergan documentación de las Reales Audiencias y Chancillerías hay más documentación sobre infidencia durante la Guerra de la Independencia que sobre causas por constitucionalismo, posiblemente por los expurgos que se hicieron sobre causas políticas contra liberales a partir de 1835.

²⁰ MORAL RONCAL, Antonio Manuel, *¡El enemigo en Palacio! Afrancesados, liberales y carlistas en la Real Casa y Patrimonio (1814-1843)*, Universidad de Alcalá, Madrid, 2005, pág. 63.

²¹ *Colección de Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de Mayo de 1812 hasta 24 de Febrero de 1813*, Imprenta Nacional, Madrid, 1820, Tomo III, págs. 84-87.

²² *Ibidem*, págs. 166-168. Decreto CCIX de 14 de noviembre de 1812, por el que *Se prescriben las reglas para la rehabilitacion de los empleados que continuaron en sus destinos bajo el gobierno del Rey intruso*.

*tad á quien tal osare o intentare, y que como á tal se le imponga la pena de la vida, ora lo egecute de hecho, ora por escrito o de palabra, moviendo o incitando, o de cualquier modo exhortando y persuadiendo á que se guarden y observen dicha Constitucion y decretos*²³. Al manifiesto le siguieron una batería de reales decretos y órdenes, anulando los actos y disposiciones tomados por las Cortes durante la ausencia del rey.

Tampoco cumpliría el monarca lo acordado en el tratado de Valençay con Napoleón sobre *los adictos al gobierno intruso*, porque entre sus primeros actos de gobierno, condenó al exilio a los afrancesados a través de la circular de 30 de mayo de 1814 del ministerio de Gracia y Justicia, por la que *se prescriben bajo diferentes articulos las reglas que han de observar los Capitanes generales, Comandantes, Gobernadores y Justicias de los pueblos de la frontera al volver á España los que se declararon parciales y fautores del Gobierno intruso, y salieron en pos de sus banderas no permitan entren en España con ningun pretexto*²⁴.

La represión, no necesitó mayor peso normativo, como puede apreciarse en el castigo ejemplar que recibieron los que no se exiliaron en las intencionas liberales de Mina en 1814, Porlier en 1815, Richart en 1816, Lacy en 1817, o Vidal en 1819²⁵. Cuando Fernando VII entendía que no se actuaba con la diligencia requerida, dictaba sentencia como ocurre el 15 de diciembre de 1815, cuando condenó a 51 encausados de la Comisión de Causas de Estado a penas de destierro y cárcel, cansado de esperar el pronto castigo²⁶.

Y así discurrió la primera parte del gobierno de Fernando VII como monarca absoluto, utilizando los medios que le otorgaba el Antiguo Régimen para reprimir todo tipo de intencionas y conspiraciones. Medios que se encontraban tocados de la misma crisis que la que arrastraba la monarquía española, y que no pudieron frenar el golpe liberal iniciado por Riego en Las Cabezas de San Juan en enero de 1820.

²³ MARTÍN DE BALMASEDA, Fermín, *Decretos del Rey Don Fernando VII*, Imprenta Real, Madrid, 1818, Tomo I, pág. 8.

²⁴ *Ibidem*, pág. 49. BARBASTRO GIL, Luis, *Los Afrancesados. Primera emigración política del siglo XIX español (1813-1820)*, CSIC, Madrid, 1993, págs. 11-30.

²⁵ BASCUÑÁN AÑOVER, Óscar, "Historia del delito político en la España contemporánea (1808-1977)", en ALVARADO, Javier y MARTOREL, Miguel (Coords.), *Historia del delito y castigo en la Edad Contemporánea*, UNED – Ed. Dykinson, Madrid, 2017, págs. 298-299.

²⁶ ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús, "Invasión francesa, Gobierno Intruso. Los fondos de la Guerra de la Independencia en el Archivo Histórico Nacional", *Cuadernos de Historia Moderna. Universidad Complutense de Madrid*, N.º 37, 2007, pág. 239.

La conspiración liberal que se extendió por España no pareció a sus promotores lo bastante importante, que la pintaron de masónica²⁷. Motivo que haría más odioso para Fernando VII el periodo llamado, *Trienio Liberal*, desde el 7 de marzo de 1820, *día en que S. M., hecho presa de la secta impía, quedo privado de su preciosa libertad*²⁸. Y que se aprovecharía durante la restauración del monarca en sus derechos tradicionales para perseguir a los seguidores del sistema constitucional por crímenes de *lesa Majestad*, no solo *humana*, sino también *divina*.

II.B. Realistas o Serviles, *facciosos*

*He oído vuestros votos, y cual tierno Padre he condescendido a lo que mis hijos reputan conducente a su felicidad. He jurado esa Constitución, por la cual suspirabais, y seré siempre su más firme apoyo*²⁹. Prácticamente desde los inicios del denominado Trienio, el estado liberal se vio asediado y necesitado de defensa, a pesar de tratarse de una continuación de lo establecido en Cádiz. Por dicho motivo, los delitos políticos o crímenes de Lesa Majestad pasaron a ser considerados delitos de Estado. Sin embargo, y a pesar de su indeterminación, tenían que ser ataques directos contra el entramado constitucional.

Por dicho motivo, con la restauración del régimen liberal de las Cortes de Cádiz, se actuó de forma parecida a como lo había hecho el monarca en 1814. Incluso se obligó a jurar la Constitución a todos los españoles, y se confinó a los diputados que habían apoyado en 1814 al rey, los conocidos *Persas*³⁰. Pero las medidas tomadas no consiguieron frenar la difusión de proclamas y la expansión de las partidas de *facciosos* realistas por España, lo que explica que fuera el Ejército el defensor frente a los ataques contra la Constitución.

²⁷ ALCALÁ GALIANO, Antonio, *Memorias*, Imprenta Enrique Rubiños, Madrid, 1886, Tomo I, págs. 429-442, en la página 432 para referirse a la masonería, utiliza la palabra *secta*, extraña palabra en boca de un supuesto masón; ALVARADO, Javier, *Masones en la Nobleza de España*, La esfera de los libros, Madrid, 2016, págs. 125-133.

²⁸ MARTÍN DE BALMASEDA, Fermín, *Decretos del Rey Don Fernando VII. por los diferentes ministerios y consejos desde 1.º de enero de 1820 hasta el 7 de marzo inclusive del mismo año, día en que S. M., a impulso de una facción impia y escandalosa, fue privado de su preciosa libertad*, Imprenta Real, Madrid, 1823, introducción del autor de 03-09-1823.

²⁹ <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc0986278>, Manifiesto de Fernando VII 10-03-1820.

³⁰ FIESTAS, op. cit., págs. 76-77.

La influencia que en la opinión pública tenía la difusión de ideas en escritos, folletos, prensa, proclamas, etc., fue una de las principales preocupaciones de los liberales desde la instalación de las Cortes en Cádiz³¹. La ley sobre libertad de imprenta se renovó en el Trienio liberal el 22 de octubre de 1820, estableciendo en su reglamento mayores límites a los escritos contrarios al sistema constitucional. En su Título II, *sobre los abusos sobre la libertad de imprenta* observamos mejor lo que se entendía por delitos políticos en esta materia, la difusión de escritos *sediciosos y subversivos*³².

Por los decretos de 17 de abril de 1821, se establecían *las penas que habrán de imponerse á los conspiradores contra la Constitucion é infractores de ella y Sobre el conocimiento y modo de proceder en las causas de conspiración*³³. Su larga vigencia para una medida de excepción figura entre las causas que explican la influencia de los militares en la política interior durante el siglo XIX y gran parte del XX. Por estos decretos, que parecen contradecirse por la jurisdicción competente para resolver las causas, los delincuentes o reos políticos podían ser fácilmente juzgados militarmente en consejos de guerra. Porque en la mayor parte de los casos, se recurría al empleo de tropa militar para su persecución, y por lo tanto la competencia final recaía en la jurisdicción castrense.

En el primero de los decretos de 1821, los liberales incluyeron una advertencia para el asustadizo Fernando VII, en el artículo 1.º: *Cualquiera persona, de cualquiera clase y condicion que sea, que conspirase directamente y de hecho á trastornar, ó destruir, ó alterar la Constitucion política de la Monarquía española, o el Gobierno monárquico moderado hereditario que la misma Constitucion establece, ó á que se confundan en una persona ó cuerpo las potestades legislativa, ejecutiva y judicial, ó á que se radiquen en otras corporaciones ó individuos, será perseguida como traidor, y condenada á muerte*. Ejercieron gran presión sobre el carácter timorato del rey para impulsar su revolucionario programa, que finalmente resultó contraproducente. El monarca se desligó muy pronto de la senda constitucional, y empezó a conspirar de forma soterrada por miedo al amenazante recuerdo de lo ocurrido a Luis XVI en Francia. La conocida después como *Ley de orden público de 1821*,

³¹ *Colección de Decretos de Cortes*, Tomo I, op. cit., pág. 14, Decreto de 10 de noviembre de 1810.

³² *Colección de los Decretos y Ordenes Generales de la Primera Legislatura*, Imprenta Nacional, Madrid, 1821, Tomo VI, págs. 233-246, Decreto LV de 22 de octubre de 1820, *Reglamento acerca de la libertad de imprenta*.

³³ *Colección de decretos de Cortes*, Imprenta Nacional, Madrid, 1821, VII, págs. 37-52.

terminó plasmada en la codificación penal de 1822. Sin embargo y a pesar de que en diarios de Cortes sobre los debates parlamentarios se cita las palabras delito político, continuó su indeterminación, posiblemente interesada por las circunstancias del momento³⁴.

En el Código Penal de 1822, los delitos políticos se encontraban divididos entre los títulos I *De los Delitos contra la Constitución y orden político de la monarquía*, II *De los delitos contra la seguridad exterior del Estado*, III *De los delitos contra la seguridad interior del Estado y contra la tranquilidad y orden público*, y IX *De los delitos o culpas de los impresores, librereros y otras personas en el abuso de la libertad de imprenta*. Pero a diferencia de lo que ocurría en la antigua legislación, quedaron limitados a los ataques o conspiraciones directas contra la Constitución, la persona del rey, y contra la seguridad interior y exterior del Estado. Aunque los delitos más graves continuaron con el castigo con la pena de muerte por traición, como en la manera tradicional³⁵.

La división en el seno liberal, el estado de guerra civil interior y la invasión francesa, terminaron rápidamente con el nuevo régimen, devolviendo a Fernando VII nuevamente su poder absoluto el 1 de octubre de 1823. Ser o haber sido liberal se convertía con la nueva restauración, en el principal de los delitos.

II.C. Para que *desaparezca para siempre del suelo español, hasta la más remota idea de que la soberanía reside en otro que en mi real persona*³⁶

La represión del Liberalismo comenzó con anterioridad a la liberación de Fernando VII el 1 de octubre de 1823. La invasión del ejército francés de *Los Cien Mil Hijos de San Luis* fue aprovechada por la

³⁴ FIESTAS, op. cit., pág. 57. *Diario de Sesiones de Cortes*, N.º 106, pág. 1713, 9 de enero de 1821, discusión del artículo 230 del proyecto de Código Penal: *Así la comisión, fundándose en que está justísimamente señalada la pena de muerte contra el que intentare trastornar ó alterar la Constitución, no solo propone esta misma pena, que es la que le ha parecido la más proporcionada contra un delito que no se puede llevar a efecto sin trastornar ó destruir, ó á lo menos alterar la Constitución, sino que claramente manifiesta que lo mira como delito político, como delito igual al del art. 191, en el hecho de proponer contra el que lo cometa la pena de traidor, que no es aplicable sino, á los delitos de Estado.*

³⁵ *Ibidem*, págs. 85-104.

³⁶ NIEVA, *Decretos Fernando VII*, 1825, op. cit., pág. 302, *Real cédula fijando las reglas que deben observarse en lo sucesivo para la elección de Alcaldes ordinarios y demas capitulares y Oficiales de los Ayuntamientos de los pueblos del Reino*, de 17 de octubre de 1824.

Junta provisional, y más tarde por la Regencia que se estableció con la ocupación de Madrid, para llevar a cabo la erradicación del Liberalismo en España³⁷. El mismo día de la liberación del rey se decretó la anulación de lo acontecido desde el 7 de marzo de 1820 certificando la labor adelantada por Junta y Regencia. Hasta el mencionado decreto de amnistía de .º de mayo de 1824, se intentó borrar de la existencia, a los responsables de las vejaciones que había tenido que sufrir el monarca. Los que no lograran huir exiliándose, sufrirían penas de cárcel, destierro o la muerte, como le ocurre al general Riego, que por el protagonismo de sus acciones fue *sentenciado por la Sala 2.ª de Corte a la pena ordinaria de horca con la calidad de arrastrado, y confiscación de todos sus bienes*³⁸.

Asimismo, los territorios que iban siendo ocupados por *los Cien Mil Hijos de San Luis* y por el *Ejercito de la Fe*, se sembraron de depósitos de liberales o sospechosos de ello. En Benavente se confinaría a los procedentes de Galicia, en Mayorga a los de Asturias, En Talavera de la Reina a los de Extremadura, el depósito de Valdepeñas para los de Andalucía, el de Villarrobledo para los de Valencia y Murcia, y en Segorbe y Calatayud se confinarían los de Cataluña y Aragón³⁹.

Una vez que Fernando VII fue liberado, consignó a los principales delincuentes para su persona en la falsa amnistía de mayo de 1824: en primer lugar, los conocidos como *masones*, que fueron los responsables de la rebelión del ejército de Ultramar, de la extensión de la conspiración liberal por la Isla de León, La Coruña, Zaragoza, Oviedo y Barcelona, y de la vuelta al sistema constitucional de 1812. En segundo lugar, a los autores de la conspiración de Madrid que le obligó a firmar la Constitución de Cádiz, y al conde del *Avisbal* por la sublevación del ejército que debía cortar la rebelión. Continuando con los que obligaron al rey al establecimiento de la Junta provisional que organizó el gobierno constitucional. Con los que se habían

³⁷ Con anterioridad a la liberación del rey, dictaron una serie de disposiciones para volver al estado anterior al 7 de marzo de 1820. Se cesó a las autoridades constitucionales, se encerró a los diputados que destituyeron al monarca, se confiscaron los bienes de los diputados responsables del traslado del rey a Cádiz, siendo desterrados de Madrid el resto de ellos para siempre y se crearon los Voluntarios Realistas.

³⁸ AGMS, Celebres, Caja 144, Exp. 5, Carpeta 3, *Riego*.

³⁹ MARTÍN DE BALMASEDA, Fermín, *Decretos de la Junta provisional, Regencia del Reino y los expedidos por su Magestad desde que fue libre del Tiránico Poder Revolucionario, comprensivo al año de 1823*, Imprenta Real, Madrid, 1824, Tomo VII, pág. 53, *Decreto de la Regencia*, de 30 de junio de 1823, *estableciendo varios depósitos a cargo de un Comisario de Vigilancia pública, para zelar y examinar todas las personas procedentes de las provincias ocupadas o que se ocupen por las tropas francesas, con otras medidas conducentes al caso*.

reunido o se reunieran en lo sucesivo en sociedades secretas. Los escritores o editores de obras contrarias al Dogma Católico. Jueces y fiscales de las causas formadas al general Elio y al teniente de Guardias Teodoro Goffieu. Y a los autores de los asesinatos del cura Vinuesa, del obispo de Vich, y de los promovidos en Granada y en La Coruña⁴⁰.

También quedaron excluidos los comandantes de las partidas formadas para hacer frente al llamado *Ejército de la Fe*. Los diputados que votaron en Cortes el 11 de junio de 1823 la destitución del Rey y la formación de una Regencia. Al general O'Donjú y a los responsables del tratado de Córdoba con Iturbide en Nueva España. Los que habiendo tenido parte activa en el gobierno constitucional o en la revolución, hubieran pasado a la América para los mismos motivos. Y finalmente, se exceptuaba del perdón a los que exiliados en el extranjero tomaran parte en tramas y conspiraciones contra los intereses del monarca⁴¹.

A pesar de que la persecución de liberales centraba el interés del monarca, la escisión que se produjo en el seno del absolutismo, motivó la represión de los conocidos por la policía como *realistas aparentes o apostólicos*⁴². El Rey, obligado por las circunstancias de su liberación, tuvo que adoptar medidas que fueron consideradas como reformas liberales por los realistas más extremados. Por lo que además de las intentonas liberales, como la de Valdés en Tarifa en 1824, los hermanos Bazán en Guardamar en 1826 o más tarde Torrijos en 1831, que motivaron la aparición de una dura legislación orientada a impedir la repetición de estos hechos, siendo *juzgados* por Comisiones militares⁴³. Se tuvo que perseguir a los autores de las rebeliones que se produjeron en sentido contrario, en las que los responsables también fueron pasados por las armas, como ocurre con Bessières

⁴⁰ Estos asesinatos fueron incluidos entre el resto de los delitos políticos porque para el monarca el fin que perseguían era la continuidad de la revolución.

⁴¹ Real cédula de 1 de mayo de 1824 *por la cual se concede indulto y perdon general...*, notas 10 y 11.

⁴² AGP, Papeles Reservados de Fernando VII, Tomo 71, Exp. 36 -39.

⁴³ Real orden de 14 de agosto de 1824 *para que cualquier revolucionario que sea aprehendido con las armas en la mano, ó envuelto en tramas con ánimo de perturbar el orden, sea entregado á una comision militar para que le juzgue; o la Real orden de 9 de octubre de 1824, comunicada al Capitan general de Castilla la Nueva señalando las penas en que incurrén los que den los gritos subversivos que se enuncian: los sectarios de sociedades secretas y demas revolucionarios, sujetándolos al juicio de las comisiones ejecutivas, según Reales órdenes anteriores*. NIEVA, *Decretos Fernando VII*, 1825, op. cit., págs. 224 y 152 respectivamente.

en 1825⁴⁴ y con los responsables de la rebelión de los *Malcontents* en Cataluña⁴⁵.

Pero contra todo pronóstico, y a pesar de los avisos de la policía sobre la gravedad de las conspiraciones apostólicas y la moderación de la población considerada constitucional, el monarca otorgó su plena confianza al secretario de Estado de Gracia y Justicia Calomarde, que se encontraba implicado en las tramas ultras. Por dicho motivo, entre 1827 y 1832, la represión liberal recibirá un decidido impulso gracias al control que el ministro impuso sobre la Policía General del Reino.

Asimismo, los movimientos revolucionarios que llevaron al poder en Francia a Luis Felipe de Orleans en 1830 infundieron esperanzas en los exiliados, que aceleraron sus proyectos de invasión, buscando la insurrección en la península. Sin embargo, la extensión de las redes de información de la policía, y la falta de apoyos en el interior de España, llevaron al fracaso a las intentonas liberales, siendo sus protagonistas pasados por las armas. Todo ello conforme a la legislación represiva vía decreto real, que requerían las circunstancias, a instancias del monarca⁴⁶.

III. LA REPRESIÓN DE LOS DELITOS POLÍTICOS

A pesar de los intentos de reforma del sistema policial durante el reinado de Carlos III, para el control de la población urbana y de la difusión de las nuevas ideas, el descubrimiento y persecución de liberales, masones, y resto de *heterodoxos* y *sectarios*, se encontraba inicialmente en manos del Santo Oficio, a pesar de que ya no era el temido tribunal de siglos anteriores. Los nuevos tiempos revolucionarios iniciados durante la Guerra de la Independencia, no fueron compatibles con la existencia de la odiada Inquisición y la represión se tuvo que encargar a la jurisdicción militar. En el Antiguo Régimen,

⁴⁴ Real decreto de 17 de agosto de 1825, *prescribiendo las penas con que deberán ser castigados los rebeldes de la insurrección de Getafe, sus cómplices, y los que en cualquiera punto cometiesen igual delito; o el Real decreto de 4 de septiembre de 1825, renovando la prohibición de que el pueblo, parte ó multitud de él, tropas ó gente armada se reúnan para representar á S. M. ó Autoridades, con las declaraciones que se expresan.* NIEVA, *Decretos Fernando VII*, 1826, op. cit., págs. 251 y 268 respectivamente.

⁴⁵ NIEVA, *Decretos Fernando VII*, 1828, op. cit., pág. 182, *Real orden comunicada al Capitan general de Cataluña y circulada á todos los de las provincias, relativa a las turbulencias de aquel Principado, dictando las providencias convenientes para apaciguarlas*, de 31 de agosto de 1827.

⁴⁶ El Real decreto de 1 de octubre de 1830 *con varias disposiciones dirigidas contra los facciosos y revolucionarios* actualizó al momento revolucionario liberal, el citado de 17 de agosto de 1825, NIEVA, *Decretos Fernando VII*, 1831, op. cit., pág. 371.

La Justicia Real no solo formaba causas a los criminales, sino que también los perseguía, ya que ejercía las funciones policiales en su jurisdicción. Sin embargo, la crisis de la monarquía española afectaba a todas las instituciones de poder tradicionales, y el Estado se había visto necesitado en sucesivas crisis de la acción del Ejército, que tenía una mejor organización y medios para aplastar las amenazas. El alzamiento del Ejército destinado a Ultramar en 1820 dejó al monarca Fernando VII sin el pilar fundamental sobre el que se apoyaba la monarquía borbónica, por lo que, para su restauración absoluta, necesitó la acción exterior.

La Iglesia católica, tampoco mantenía los mismos intereses que Fernando VII tras las dificultades padecidas en el Trienio, y pretendía influir en el Rey para recuperar sus tradicionales prerrogativas. Por lo que para consolidar su poder y mantener el decoro de su corona, el monarca, tuvo que adoptar las reformas necesarias a pesar del difícil equilibrio y presiones que sufrió. Como veremos, a lo largo de su reinado diversas instituciones y jurisdicciones se mezclaron en la lucha contra el Liberalismo generalizando la represión de estos *nuevos* delincuentes políticos. Todo ello, a pesar de las continuas idas y venidas, duplicidades y frecuentes conflictos de competencias, en un periodo de crisis total de la monarquía.

III.A. La Jurisdicción Eclesiástica. La Inquisición

El cambio de mentalidad que se va produciendo a lo largo del siglo XVIII en un sector avanzado de la sociedad, estalla con la Revolución Francesa en el continente, aflorando un pensamiento contrario al Antiguo Régimen que desbordó el reformismo Ilustrado. Este pensamiento iba acompañado de una difusión de ideas y noticias sin precedentes en periódicos y folletos propagandísticos, y había dejado a la lenta Inquisición en anticuada e inoperante. Sin embargo, el discurso de la Iglesia no cesó de recordar a los monarcas, sobre la amenaza revolucionaria que se cernía sobre las *cabezas coronadas* porque el libre pensamiento se iba extendiendo por Europa⁴⁷. En este discurso

⁴⁷ Existen bastantes ejemplos interesantes, por ejemplo, la obra del obispo de Ceuta, VÉLEZ, Rafael de, *Apología del Altar y del Trono*, Imprenta de Cano, Madrid, 1818, Tomo I; o la Carta Pastoral de 1827 del cardenal arzobispo de Toledo, Pedro Inguanzo. Sobre libre pensamiento y Masonería, es interesante la obra de FERRER BENIMELI, José Antonio, *La Masonería Española en el Siglo XVIII, Siglo XXI*, Madrid, 1986. Sobre el discurso de la Iglesia, MORALES RUIZ, Juan José, *El Discurso Antimasonónico en la Guerra Civil Española (1936-1939)*, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2001, págs. 41-62.

la Iglesia invadía el terreno de la jurisdicción real, convirtiendo la disidencia política en herejía, siendo muy bien aprovechado por el regalismo de los monarcas para *universalizar* la represión⁴⁸.

Con el retorno del Rey y del *Antiguo Régimen* en 1814, se restituyó el Tribunal del Santo Oficio con plenos poderes para la erradicación de las novedades a *causa de las sectas anticatólicas introducidas en la nación durante la guerra de la Independencia*⁴⁹, aunque se convirtió en un instrumento de represión política bajo poder del monarca. Sin embargo, entre 1814 y 1820, las insurrecciones de Porlier, Lacy, Richard, y sobre todo la del Ejército Expedicionario de la Isla, organizadas por supuestas sociedades secretas con tintes masónicos, afianzaron el desprestigio de la Inquisición al no conseguir atajarlas. La vuelta del sistema constitucional en 1820 terminó definitivamente con el tribunal.

El método de investigación inquisitorial se encontraba profundamente ligado a la información que proporcionaban familiares y delatores, en la sociedad católica de la época, donde *nada hay escondido, nada secreto*⁵⁰. Al contrario de lo que ocurre con las nuevas sociedades secretas a las que será difícil dar caza por los medios tradicionales. Aun así, se conocen varias causas por delación, como la del sargento mayor Manuel Llorente, *por libertino* en 1814⁵¹; Fray Pelegrín Castañas fue *delatado de oídas* en 1815 por asistir a una logia masónica cuando estaba prisionero en Francia⁵²; o como le ocurre a José González Aceijas que había sido nombrado vicario apostólico por el *gobierno intruso*, y se le procesa al ser delatado en 1815⁵³.

Por la tradicional consideración mixta de los delitos políticos, los reos eran encerrados en las cárceles de la Inquisición para separarlos

⁴⁸ HERRERO, Cesar, *La Justicia Española en la crisis del Poder Absoluto*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1989, págs. 231-237.

⁴⁹ Real decreto de 21 de julio de 1814, *por el cual se restablece el Consejo de Inquisición y los demás tribunales del Santo Oficio al ejercicio de su jurisdicción, guardando el uso, y ordenanzas con que se gobernaban en el año de 1808*, MARTÍN DE BALMASEDA, *Decretos F. VII*, 1818, op. cit. pág. 132.

⁵⁰ Alocución Consistorial del Papa Pío IX 25-09-1865: *¿Cuánto difieren de aquella asociación, las piadosas sociedades de los fieles que florecen en la Iglesia Católica! En ella, nada hay escondido, nada secreto. Las reglas que la rigen están a la vista de todos... mientras que por el contrario, se fomenta, o al menos se tolera, la tenebrosa Sociedad masónica, tan enemiga de Dios y de la Iglesia, tan peligrosa aun para la seguridad de los reinos.*

⁵¹ AHN, Inquisición, 3720, Exp. 79.

⁵² AHN, Inquisición, 3721, Exp. 205.

⁵³ AHN, Inquisición, 3723, Exp. 92.

de los delincuentes comunes⁵⁴, como le ocurrió a Juan Van Halen, que estuvo implicado en la conspiración liberal de Granada, a la que se dio el interesado título de masónica. Delatado por un compañero en septiembre de 1817, fue encerrado en la cárcel de la Inquisición de Murcia y después en la de Madrid, de donde se fugó de forma novelesca como narra en sus memorias⁵⁵.

La restauración del monarca en 1823 defraudó a la Iglesia por no restablecer la Inquisición. Sin embargo, a instancias de algunos preladados se crearon en distintas diócesis *Juntas de la Fe* con las mismas competencias que las del Santo Oficio: *Recibir libros, papeles y delaciones de dichos y hechos contra la fe y las buenas costumbres*⁵⁶. Finalmente, y a pesar del fin de la Inquisición, la Iglesia Española mantuvo su influencia en la sociedad y sobre todo en las partidas locales de los Voluntarios Realistas. Desapareció la Inquisición, pero no el espíritu inquisitorial⁵⁷.

III.B. La Jurisdicción Militar. Las Comisiones Militares

En el reinado de Carlos III se emplearon comisiones militares para la persecución de malhechores y contrabandistas. Sin embargo, su empleo como consejos de guerra para castigar a delincuentes políticos, fue característico del reinado de Fernando VII, a pesar de que los franceses también las utilizaron en los territorios ocupados por las tropas napoleónicas para delitos de sangre y castigar la *infidencia*⁵⁸.

Las Comisiones Militares tuvieron su origen en Cádiz y después se extendieron por España a cargo de los capitanes generales por Real orden del ministerio de la Guerra de 6 septiembre de 1814. Se crearon

⁵⁴ ALONSO TEJADA, Luis, *Ocaso de la Inquisición en los últimos años del reinado de Fernando VII*, Zero, Madrid, 1969, págs. 24-25.

⁵⁵ AHN, Inquisición, 118, Exp. 23; AGMS 1.ª 552 B; AGP, Papeles Reservados Fernando VII, Tomo 18.

⁵⁶ ALONSO TEJADA, op. cit., págs. 143-191; ARTOLA, Miguel, *La España de Fernando VII*, RBA, Madrid, 2005, pág. 680.

⁵⁷ Afirmación de Caro Baroja, en DUFOR, Gerard, “¿Cuándo fue abolida la Inquisición en España?”, *Cuadernos de Ilustración y Romanticismo*, N.º 13, 2005, pág. 107. En LA PARRA, Emilio y CASADO, María Ángeles, *La Inquisición en España. Agonía y abolición*, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2013, se expone que la Inquisición tuvo un final lento por las debilidades de la Ilustración y del Liberalismo en España, y porque la Iglesia estaba más interesada en aumentar el poder de los obispos.

⁵⁸ CARRUESCO, Alejandro y VARAS, Fernando, “La justicia oscense durante el reinado de Fernando VII: alcaldes mayores y gobernadores militares y políticos”, *Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses*, N.º 128, 2018, pág. 230.

para que ...en el preciso término de tres días forme causa, la sustancie y concluya con arreglo a las leyes militares... a los implicados en sediciones, conspiraciones, partidos o alborotos. En 1816 terminaron su actividad porque la conciencia del Rey dispuso la supresión de las comisiones extraordinarias que entendían de ciertas causas criminales, señaladamente las políticas⁵⁹, encomendando el conocimiento de éstas a la jurisdicción ordinaria, excepto las formadas a militares que continuarían en consejos de guerra ordinarios⁶⁰.

El real decreto de 26 de enero de 1816 de cese de las comisiones, nos informa claramente de la razón de ser de estos tribunales militares: *Durante mi ausencia de España se suscitaron dos partidos titulados de serviles y liberales: la división que reina entre ellos se ha propagado a una gran parte de mis reinos; y siendo una de mis primeras obligaciones la que como padre me incumbe de poner término á estas diferencias, ... que hasta las voces de liberales y serviles desaparezcan del uso común; y que en el término de seis meses queden finalizadas todas las causas procedentes de semejante principio*⁶¹.

La restauración absoluta de Fernando VII, también llevó a la reimplantación de las comisiones militares el 13 de enero de 1824. Por Real orden se estableció que en el plazo de quince días se formaran en todas las capitales de provincia, incluidas las Islas Baleares, *Comisiones Militares ejecutivas y permanentes, por todo el tiempo que lo exijan las circunstancias ... porque existen hombres que pertinaces y obcecados en sus extravíos, ó acostumbrados á vivir y medrar en el desorden, han alterado la tranquilidad pública, ya profiriendo expresiones contra los legítimos derechos del Trono y en favor de la abolida constitucion, ya forjando y esparciendo noticias falsas que alarman á los fieles vasallos de S. M.*,⁶². Además, el 9 de octubre de 1824, se ordenaba que dictaran pena de muerte *para los que usen voces alarmantes y subversivas de Viva Riego, Viva la Constitución, Mueran los serviles, mueran los tiranos, Viva la Libertad*⁶³, y para *Los masones, comuneros y otros*

⁵⁹ ALMIRANTE, José, *Diccionario Militar*, Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, Tomo I, pág. 262, es, más bien que CONSEJO de GUERRA según ORDENANZA, un tribunal POLÍTICO creado en los tiempos de nuestras primeras discordias, y que es de desear no resucite en las futuras. ... En la década, llamada ominosa del 23 al 33, la restauración absolutista abusó para sus venganzas de las COMISIONES MILITARES: y el nombre solo desde entonces infunde justa repugnancia.

⁶⁰ ORTEGO GIL, Pedro, *Entre Jueces y Reos. Las postrimerías del Derecho penal absolutista*, Dykinson, Madrid, 2015, págs. 165-184.

⁶¹ MARTÍN DE BALMASEDA, *Decretos Rey Fernando VII*, 1819, op. cit., pág. 28.

⁶² NIEVA, *Decretos Fernando VII*, 1824, op. cit., pág. 64.

⁶³ BALLBÉ, Manuel, *Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983)*, Alianza Editorial, Madrid, 1983, págs. 87-89; PEGENAUTE GARDE,

*sectarios, atendiendo a que deben considerarse como enemigos del Altar y los Tronos...*⁶⁴.

Las comisiones militares estaban por encima de fueros y se utilizaron para juzgar sumariamente, en detrimento de la jurisdicción ordinaria. Su procedimiento estaba marcado en las Ordenanzas militares de 1768 y sus causas se subsanaban *en el menor tiempo posible, bajo la responsabilidad del presidente, vocales y fiscal, debiendo omitirse el evacuar citas inconducentes, y también la formula de los careos, como no necesaria, a no pedirlos el defensor del reo por ser convenientes a su defensa*⁶⁵.

La ocupación de Tarifa por el coronel Valdés motivó un endurecimiento de la represión, por dicho motivo el 14 de agosto de 1824 se ordenó *que cualquier revolucionario que sea aprehendido con las armas en la mano, ó envuelto en tramas con ánimo de perturbar el orden, sea entregado á una comision militar para que le juzgue, puntualizando para que breve y sumariamente lo juzgue y ejecute lo juzgado*⁶⁶. Y el 20 de agosto de 1824, se dictó que *Todos los españoles procedentes de Gibraltar o de cualquier otro punto que hayan desembarcado en las costas de España y que con armas, papeles sediciosos o de cualquier otro modo, intenten establecer el sistema anárquico llamado constitucional, o perturben el orden público, serán pasados por las armas inmediatamente que sean aprehendidos, sin otra dilación que la precisa para recibir los auxilios espirituales*⁶⁷.

No obstante, se decretó su cese por la Secretaría de Gracia y Justicia el 4 de agosto de 1825, por problemas entre la comisión militar de Castilla la Nueva con la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, y las presiones del Consejo de Castilla, *por haber cesado las causas que motivaron su creación y ser contrarias a otras leyes*⁶⁸. Aunque las autoridades militares continuaron con la represión, incluso contra realistas como ocurre con el fusilamiento de Bessières⁶⁹, o de los cabecillas de la in-

Pedro, *Represión Política en el Reinado de Fernando VII, Las Comisiones Militares (1824-2825)*, Universidad de Navarra, Pamplona, 1974.

⁶⁴ PEGENAUTE, op. cit., pág. 37.

⁶⁵ ORTEGO, op. cit., pág. 191.

⁶⁶ NIEVA, *Decretos Fernando VII*, 1825, pág. 152.

⁶⁷ PESET REIG, Mariano y José, "Legislación contra Liberales en los comienzos de la Década Absolutista (1823-1825)", *Anuario de historia del derecho español*, N.º 37, 1967, págs. 475-476. La Real orden sobre los acontecimientos de Tarifa se encuentra publicada en *Gazeta Extraordinaria de Madrid*, N.º 107, 24-08-1824, pág. 431.

⁶⁸ PEGENAUTE, op. cit., pág. 80; NIEVA, *Decretos Fernando VII*, 1826, op. cit., pág. 230.

⁶⁹ FONTANA, Josep, *De en medio del tiempo*, Crítica, Barcelona, 2019, págs. 191-195.

surrección de los *Agraviats* o *Malcontents* en Cataluña⁷⁰. Sin embargo, las comisiones continuaron en América y donde existiera la amenaza revolucionaria⁷¹. Asimismo, el 26 de agosto de 1828 se vuelve a ordenar su supresión, porque algunos capitanes generales las habían reinstaurado por su cuenta⁷².

El miedo a que la revolución francesa de 1830 pudiera traspasar las fronteras, provocó que el 1 de octubre de 1830, a través del *Real decreto con varias disposiciones dirigidas contra los facciosos y revolucionarios*, se volviera a señalar el castigo dictado el 17 de agosto de 1825, por el que los insurrectos y traidores serían pasados por las armas⁷³. Y el 18 de marzo de 1831 volvieron las comisiones militares, otorgado nuevamente facultades extraordinarias a los capitanes generales, incluyendo la citada Real orden de 20 de agosto de 1824⁷⁴. El cese definitivo de las comisiones militares se dio el 21 de julio de 1834 por Real decreto de la Reina Gobernadora finalizando la represión absolutista más dura.

Mención aparte merece la actuación del Cuerpo de Voluntarios Realistas, su Reglamento, los situaba como una milicia política local, absolutista y contrarrevolucionaria, auxiliar del ejército en la represión. En el artículo 183 figura: *El grande objeto del establecimiento del Cuerpo de Voluntarios Realistas es el combatir los revolucionarios y los conspiradores, y exterminar la revolución y las conspiraciones de cualquier naturaleza y clase que sean. La tranquilidad absoluta del pueblo de que son vecinos, y su completa seguridad contra los trastornos o*

⁷⁰ BAYO, Estanislao de Kostca, *Historia y vida de Fernando VII de España*, Imprenta de Repullés, Madrid, 1842, Tomo III, pág. 300, el rey revistió al Conde de España *de todo el poder de su regia autoridad para modificar las sentencias impuestas a los delincuentes, o para perdonar a los rebeldes, extendiéndola a la destitución de los generales, gefes, autoridades y empleados de todos los ramos que no mostrasen la más activa decisión en el círculo de sus respectivas obligaciones para contener y reprimir la rebelión.*

⁷¹ AHN, Ultramar; 1607, Exp.7, el secretario del Despacho de Guerra traslada al de Gracia y Justicia la Real Orden comunicada al capitán general de Cuba en 21 de junio de 1826, mandando que continúen las comisiones militares de La Habana.

⁷² BALLBÉ, op. cit., pág. 90, el general Luis Fernández de Córdova solicitó en 1825 la supresión de las Comisiones Militares manifestando *que la justicia administrada por aquel odioso tribunal tomaba el carácter de una venganza horrible y furiosa que tenía consternado al país y afligidos a sus buenos servidores.*

⁷³ NIEVA, *Decretos Fernando VII*, 1831, op. cit., pág. 371.

⁷⁴ BALLBÉ, op. cit., pág. 90; MORALES RUÍZ, Juan José, "La represión de la Masonería durante el reinado de Fernando VII", SEPÚLVEDA, Isidro y BULDAÍN, Blanca (Coords.), *La Iglesia Española en la Crisis del Antiguo Régimen*, UNED, Madrid, 2003, pág. 217.

*intentos de los enemigos, hijos de las revoluciones políticas, y contra los demás enemigos que puedan perturbarla*⁷⁵.

Sin embargo, se convertirán en el principal exponente del radicalismo absolutista, para servir posteriormente como base en la formación del Carlismo⁷⁶. Producirán desórdenes y conflictos a causa de las funciones que tenían reseñadas y que cumplirán de forma un tanto arbitraria, usurpando facultades de las autoridades y desobedeciéndolas en ocasiones⁷⁷. En los archivos encontramos frecuentes casos de excesos cometidos por los Voluntarios, como ocurre en la causa de oficio entre 1825-1826 *contra Juan de la Guerra, oficial retirado de milicias y comandante que fue del batallón de voluntarios realistas, José y Manuel Castrillo, capitanes actuales del mismo cuerpo, y Juan Pescador Herbás, voluntario realista y propuesto por el ayuntamiento para oficial, sobre su apresamiento por mantener una reunión sospechosa e insultar a la justicia*⁷⁸. Otro ejemplo lo tenemos en la causa criminal instruida entre 1823 y 1824, contra el licenciado Manuel de Lacuesta abogado de los Reales Consejos, José de Lacuesta, Ramón de Anda, Lorenzo Arana y José Pin, vecinos de Labastida, detenidos por los voluntarios realistas como sospechosos de participar en una reunión de constitucionales⁷⁹.

Los voluntarios realistas se nutrían de la sociedad rural antiliberal tan influida por el clero que, aprovechando la circunstancia de su pertenencia al Cuerpo, perjudicaron cuanto pudieron a sus vecinos, a veces por cualquier conflicto civil previo. La delación se convirtió en la principal arma para atacar a sus supuestos adversarios, convenientemente fomentada por las disposiciones reales.

⁷⁵ RÚJULA, Pedro, *Contrarrevolución. Realismo y Carlismo en Aragón y el Maestrazgo, 1820-1840*, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1998, pág. 104.

⁷⁶ AHN, Consejos, 6308, Exp. 1, Expediente de 1827 de la Comisión de Causas de Estado, sobre la formación en Almería de una Junta Apostólica para apoyar a los sublevados de Cataluña en defensa del infante don Carlos, y averiguaciones sobre la actitud de las autoridades de esta ciudad. Los principales dirigentes de la Junta eran el deán y el maestrescuela de la Catedral, el alcalde mayor de la ciudad, Dionisio Marcelino Angulo, y Luis Acosta, comandante de los Voluntarios Realistas. Adjunta la causa instruida en la Audiencia y Chancillería de Granada, que consta de cinco piezas.

⁷⁷ AHN, Consejos, 3656, Exp. 30, Expediente del Consejo de Castilla, de marzo de 1824, formado sobre una orden circular para que los voluntarios realistas no se inmiscuyan en el gobierno de los pueblos ni en la administración de Justicia.

⁷⁸ ARCHV, Salas de lo Criminal, Caja 1828.1.

⁷⁹ AHPA, JUS,15830.

III.C. Los problemas de la jurisdicción real

En 1814 el regreso de Fernando VII significó la vuelta al Antiguo Régimen, sin embargo, la jurisdicción real no recuperó totalmente su estado anterior y se mantuvieron algunas de las reformas liberales que favorecían el aumento del poder real. No interesó una vuelta atrás sin más, porque se necesitaba unificar la forma de proceder para poder perseguir a los nuevos “delincuentes políticos”. Por dicho motivo, no se restableció la jurisdicción señorial, para que no existieran excepciones que escaparan a la represión. Sin embargo, al mismo tiempo se confirieron poderes especiales a la jurisdicción militar para agilizar los procesos y conseguir un pronto castigo, medida que provocó graves conflictos de competencias y presiones entre sectores de poder.

La represión de la justicia comenzó con el restablecimiento de la *Sala de Alcaldes de Casa y Corte* en sus competencias judiciales y policiales tradicionales, a la vez que se impartían instrucciones para *el arresto ó prisiones de personas afectas á las novedades que se iban introduciendo*⁸⁰.

El 14 de mayo de 1814 creó una *Comisión de Policía* para inquirir, justificar y castigar a los autores y cómplices de los procedimientos de las Cortes contra la soberanía del Rey. Pero la Comisión de Policía reconoce el 1 de julio de 1814 que no podía *en cuatro días remitir conclusas y sentenciadas las causas*, como se les pedía, porque era un trabajo *delicado, arduo, difícil y odioso* que les había de causar *muchas penas y disgustos* que S. M. Nombre otros Ministros que puedan *satisfacer con más prontitud sus deseos, encargándose de estas causas*, por esta razón se crea por Real orden de 14 de julio de 1814 la *Comisión de Causas de Estado* al objeto de hallar y sentenciar de la forma más rápida a los culpables del menoscabo de la Soberanía Real. Pero al realizar los procesos conforme al procedimiento ordinario, no se consiguieron los resultados esperados, y el Rey cansado de esperar, el 15 de diciembre de 1815 condenó a 51 de los encausados a penas de destierro o cárcel⁸¹.

⁸⁰ MARTÍN DE BALMASEDA, *Decretos Fernando VII*, 1818, Tomo I, op. cit., págs. 23-55. Por Real decreto de 23-05-1814 se restablecía la *Sala de Alcaldes de Casa y Corte*, y días después el 1 de junio, se impartieron instrucciones por una Circular de Gracia y Justicia, *por la cual se prescriben las Reales intenciones de S. M. sobre el arresto ó prisiones de personas afectas á las novedades que se iban introduciendo; mandando que los Ministros de Policía como los demas Jueces procedan á la calificacion de aquellos contra quienes haya pruebas de abuso en la conducta...*

⁸¹ ÁLVAREZ-COCA, op. cit., págs. 201-255, la autora nos informa que el 26 de enero de 1816 se suprimió la Comisión junto con el resto, sin embargo, por real decreto de 3 de febrero de 1816, continuaría hasta la finalización de las causas abiertas:

Al mismo tiempo, funcionó el *Ministerio* o *Tribunal de Seguridad Pública*, creado en marzo de 1815 para perseguir afrancesados por temor a una invasión, coincidiendo con la fuga y regreso de Napoleón a Francia⁸². Su verdadera razón de existencia fue la represión política al margen de la vía ordinaria, ya que *el curso ordinario y lento de las leyes no podía embarazar las maquinaciones de los malvados*⁸³. Las presiones del Consejo de Castilla provocaron que fuera suprimido el 8 de octubre del mismo año⁸⁴, *a pesar de lo conveniente que es para mantener el orden social reprimir á los hombres díscolos, ociosos y vagamundos, que inquietan y perturban al pacífico y honrado habitante*⁸⁵.

Las idas y venidas producidas en el reinado de Fernando VII, no ayudaron al proceso de reforma de la Justicia que se venía desarrollando desde el siglo XVIII. Por ello, cada vez que Fernando VII demandaba una represión más enérgica, se saldría de la vía ordinaria de los tribunales, creando comisiones como las anteriormente descritas, tribunales temporales de excepción o el traslado de las causas a la jurisdicción militar, junto con una legislación adaptada a sus necesidades. Además, el órgano jurisdiccional superior, el Consejo de Castilla, no recuperó el poder que había disfrutado antes de la Guerra de la Independencia, y en la llamada *década ominosa* el monarca otorgó gran influencia a la *Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia*.

En estudios recientes sobre casos concretos en Reales Audiencias y Chancillerías, los delitos políticos ocuparon un 8% del total de las causas criminales. Dentro de este dato general existen variaciones territoriales motivadas por causas personales, cambios de los encargados de la represión, etapas con mayor o menor presión represiva desde el Gobierno, etc., que son indicadores de la dificultad de establecer pautas fijas⁸⁶. Sin embargo, los estudios sobre la documentación judicial existente presentan un grave problema por la eliminación de gran parte de la relacionada con las causas políticas a partir de 1835⁸⁷.

No habiendo sido mi Real ánimo alterar de modo alguno por mi decreto de 26 de Enero último la Comisión especial o tribunal creado por mí en esta Corte para entender en las causas de Estado; y bien satisfecho de la rectitud, zelo y actividad de los Jueces que la componen, quiero que continúe en sus tareas hasta finalizar las causas pendientes y sus incidencias, esperando que las concluirán y terminarán a la mayor brevedad, sin mezclarse en la formación de otras nuevas.

⁸² TURRADO VIDAL, Martín, *Estudios sobre Historia de la Policía*, Ministerio del Interior, Madrid, 1991, Tomo I, págs.19-20.

⁸³ ORTEGO, op. cit., pág. 225.

⁸⁴ AHN, Consejos, 1738 bis, Juzgado de Seguridad Pública.

⁸⁵ MARTÍN DE BALMASEDA, *Decretos Fernando VII*, 1819, pág. 315.

⁸⁶ ORTEGO, op. cit., págs. 115-117.

⁸⁷ ARG, Sig. 919-12, *Causa sobre expedientes de delitos políticos de 1820 a 1832, quemados por Real orden de 4 de mayo de 1835*; ARM, Gobernació i Audiència Crimi-

Por lo que la falta de datos fiables se ha paliado en la historiografía con crónicas, o memorias justificativas que han impedido hasta el momento el conocimiento real del alcance de la represión del Liberalismo por su parcialidad⁸⁸.

El problema existente en la persecución de los delincuentes políticos se agravó porque las falsas delaciones que se generaban por problemas civiles previos iniciaban procesos criminales que lastraban la actuación de los tribunales para no llegar a ninguna parte. Los particulares se aprovecharon de la administración de justicia para perjudicar a aquel con quien tuvieran cualquier disputa, convirtiéndola en política⁸⁹. La delación, de la misma forma que ocurría en los procesos inquisitoriales se continúa utilizando por párrocos o por la sociedad tan influida por la Iglesia, y se convierte en la principal forma de sacar a la luz supuestos delitos políticos que se producen en *reuniones sospechosas* o *tenebrosas*, o por *estar iniciados por haber pertenecido a sociedades secretas*⁹⁰.

Por otro lado, los jueces formaban parte de uno de los grupos de poder del Antiguo Régimen, a pesar de no existir separación de poderes. Instruían y a la vez sentenciaban, y además participaban del reparto de las penas de multa⁹¹. No existía la presunción de inocencia, llegando a la utilización de la tortura como medio probatorio, por lo que el reo se encontraba prácticamente indefenso y los jueces tenían excesiva libertad para interpretar las leyes y elegir las penas. Las penas eran crueles y desproporcionadas para los delitos cometidos⁹².

nal, Sig. 995/7 Palma. 1835, *Expediente relativo a la quema de varias y distintas causas criminales formadas sobre materias políticas, executada en virtud de Real Orden; o el Expurgo de las causas criminales juzgadas... desde el año 1826 hasta el año 1840*, que se llevó a cabo entre 1870 y 1872 en la Audiencia Territorial de Zaragoza por Real orden de 4 de agosto de 1870, AHPZ, código de referencia ES/AHPZ - J/004778/0001.

⁸⁸ SIMAL, Juan Luis, *Emigrados. España y el exilio internacional, 1814-1834*, CEPC, Madrid, 2012, pág. 38.

⁸⁹ ORTEGO, op. cit., págs. 115-117.

⁹⁰ De 30 de abril de 1831 es una Real Orden que certifica lo que se venía haciendo para favorecer la delación, en la que se resuelve que *los denunciadores de hechos o indicios contra la seguridad pública no sean responsables en ningún Tribunal de los avisos que den a la Policía, cualquiera que sea su resultado*. MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino, *Historia de los Heterodoxos Españoles*, Homo Legens, Madrid, 2011, Tomo II, pág. 638, se hace eco de que en 1825 fue descubierta en Granada una logia de siete adeptos, que se reunían en un Carmen no lejano de la Alhambra. El jardinero los delató, y fueron sorprendidos por el juez Pedrosa en ocasión en que recibían a un adepto.

⁹¹ CASTELLANO, Juan Luis e GÓMEZ GONZÁLEZ, Inés, "Reflexiones sobre la Justicia en el Antiguo Régimen a propósito de unas cartas a Villena", *Chronica Nova*, N.º 22, 1995, pág. 27.

⁹² ALVARADO PLANAS, Javier, "La Ilustración y la humanización del Derecho Penal" ALVARADO, Javier y MARORRELL, Miguel (Coord.), *Historia del delito y cas-*

Las penas, como se recordaba en la *Real cédula que contiene el reglamento de imprentas* de 12 de julio de 1830, *serán á proporcion de la mayor o menor malicia del autor, ó de sus escritos, hasta la de muerte, si fuere el delito de lesa magestad divina o humana*⁹³. Y la pena de muerte, iba siempre acompañada de la confiscación de bienes y de otras penas infamantes para los delincuentes políticos⁹⁴. A pesar de todo, y aunque las condenas se superaban el 80% de los reos, la mayoría de los jueces emplearán los castigos más leves y posiblemente más acordes con los cambios producidos en la sociedad⁹⁵.

Finalmente, la actividad judicial creció de forma exponencial a la vez que la crisis de la monarquía se hacía más evidente. De igual forma que ocurre durante la etapa constitucional del Trienio, provocado ese aumento de causas políticas por la debilidad del gobierno.

III.D. La represión desde el Gabinete del Rey: La Secretaría de Gracia y Justicia, la Superintendencia General de Policía del Reino y las Purificaciones.

La segunda restauración absoluta de Fernando VII, y la concentración de poder entorno a su persona, otorgó gran protagonismo a su gabinete, sobre todo a la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia. A pesar de las presiones de exteriores, del renovado Consejo de Estado de marcado carácter *apostólico*, las intentonas de uno u otro signo, la rebelión de los *Malcontents*, etc., Fernando VII se apoyó en las secretarías o ministerios para la gestión de su Estado cambiando el sistema de poder en detrimento de los Consejos⁹⁶.

Con la entrada en España en abril de 1823 de los Cien Mil Hijos de San Luis para restituir al trono a Fernando VII, se inició una feroz represión y se tomaron medidas policiales a partir del Decreto de 8 de junio de 1823 de la Regencia por el que se crea una Superintendencia general de Vigilancia pública para todo el Reino. Al objeto de *precaver y evitar todo extravío, velar sobre la conducta de las personas por sus*

tigo en *la Edad Contemporánea*, UNED – Ed. Dykinson, Madrid, 2017, págs. 19-21.

⁹³ NIEVA, *Decretos Fernando VII*, 1831, op. cit., pág. 278.

⁹⁴ MASFERRER DOMINGO, Aniceto, “La codificación del Derecho penal en España. Tradición e influencias extranjeras: su contribución al proceso codificador” en ALVARADO, Javier y MARORRELL, Miguel (Coord.), *Historia del delito y castigo en la Edad Contemporánea*, UNED – Ed. Dykinson, Madrid, 2017, págs. 69-72.

⁹⁵ ORTEGO, op. cit., págs.104-117.

⁹⁶ ESTEBAN de VEGA, Mariano, “Estado y Administración Central en el reinado de Fernando VII”, *Historia Contemporánea*, N.º 17, 1998, págs. 81-111.

*opiniones y principios contrarios a la Religión y el Trono*⁹⁷. Con la vuelta del Rey al poder, algunas de las medidas de la Regencia fueron cesadas, quedando los asuntos de la Superintendencia General de Vigilancia encuadrados en la secretaría de Gracia y Justicia⁹⁸.

En enero de 1824, se creó la Policía General del Reino a partir de la experiencia de la Superintendencia General de Vigilancia Pública, remarcando la necesidad de controlar a la población. Fernando VII puso mucho interés en *el arreglo de la policía de mis Reinos, la cual debe hacerme conocer la opinión y las necesidades de mis pueblos, e indicarme los medios de reprimir el espíritu de sedición, de extirpar los elementos de discordia, y de desobstruir todos los manantiales de prosperidad*⁹⁹.

Desde su origen la Policía General del Reino se dedicó decididamente hacia el control político de la población. A través de una circular reservada de 4 de octubre de 1824 del Superintendente general, remitida á todos los intendentes de policía del reino, previniéndoles que formen y le remitan dos indices, uno de hombres, y otro de mugeres, de todas las personas existentes en sus provincias, que merezcan alguna de las notas, que abajo se dirán cualquiera que sea su sexo, su estado y su edad. Las notas de que se trata son las siguientes: adicto al sistema constitucional; —voluntario nacional de caballeria, ó infanteria; —individuo de compañía ó batallón sagrado; —reputado por mason; conocido por comunero; —tenido por liberal exaltado ó moderado; —comprador de bienes nacionales; —secularizado. Todos los sujetos comprendidos en estas ocho notas son sospechosos, y ni á ellos, ni á sus hijos, criados ó dependientes, deben darseles pasaportes para trasladarse de un punto á otro, sino despues de probar la necesidad del viaje, y de dar fiador seguro. Ademas, los pasaportes llevan una contraseña, que sirve para que todas las autoridades á quienes tienen que presentarse conozcan que son sospechosos y vigilen su conducta¹⁰⁰.

No obstante, vigiló y persiguió tanto a liberales como a ultra absolutistas, extendiendo rápidamente su red de información, advirtiénd-

⁹⁷ MARTÍN DE BALMASEDA, Fermín, *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, Regencia del Reino*, Imprenta Real, Madrid, 1824, Tomo VII, págs. 22-39.

⁹⁸ MARTÍN DE BALMASEDA, *Decretos y resoluciones Regencia*, pág. 166.

⁹⁹ *Real Cédula por la que se establece la creación de la Policía General del Reino* de 13 de enero de 1824 en NIEVA, *Decretos Fernando VII*, 1824, Tomo VIII, págs. 49-62. HINOJAL AGUADO, Diego, "La Policía de Fernando VII y la persecución de la Masonería", en José Antonio Ferrer Benimeli, coord., *La Masonería Española, Represión y Exilios*, CEHME, Zaragoza, 2010, Tomo II, págs. 1467-1488.

¹⁰⁰ "Documentos para la Historia moderna de España. Ordenanza del superintendente general de policía en Madrid de 4 de octubre de 1824" en *Ocios de Españoles emigrados*, N.º 10, 1825, págs. 15-20.

dose una dependencia directa del monarca, como se desprende de la correspondencia entre el rey y el Superintendente General de Policía. Su creación fue vista como una sustitución de la Inquisición por el sector ultra que presionó para su disolución. Por ello, en 1827 el secretario de Gracia y Justicia Calomarde terminó con su autonomía, situándola bajo su control, dedicándose en exclusiva a perseguir a liberales.

El sector apostólico o ultra absolutista no consiguió restablecer la Inquisición, y la Policía asumió algunas de sus funciones como la recogida de libros e impresos, con el auxilio de párrocos en sus diócesis. Para ser analizados por organismos de carácter inquisitorial dependientes del monarca. El 24 de julio de 1823, antes de la liberación del Rey, ya se había creado la *Comisión Reservada*, donde Raymundo Eppenhard y Salinas del antiguo Consejo de la Inquisición junto con otros eclesiásticos, recopilaron documentos que los *revolucionarios en su vergonzosa huida dejaron abandonados ... pertenecientes a la Secta de Mases, Comuneros y demás asociaciones secretas...*¹⁰¹.

Fernando VII transformó la Comisión Reservada en Junta Reservada de Estado, bajo dependencia del Ministerio de Gracia y Justicia y de la Superintendencia General de Policía. El Superintendente General pertenecía a la Junta Reservada y desde su reglamento de 22 de abril de 1824, se señalaba su función: *La incumbencia principal de la Junta es informar al Gobierno de cuanto tenga relación con las asociaciones secretas que existieron o existan en España y suministrarle los datos necesarios para que conozca todas sus ramificaciones e impida su reproducción*¹⁰². Elaboraron dos instrumentos: *una historia de las asociaciones secretas* y un *índice* de los pertenecientes a la Milicia Nacional, a Batallones Sagrados, a las Compañías sueltas de Escopeteros o Cazadores de Montaña, a los Ayuntamientos Constitucionales, a las reuniones patrióticas que habían influido en el gobierno y cualquiera que hubiera obtenido cargos o se hubiera adherido al sistema constitucional¹⁰³. La Junta Reservada se encargaba de revisar los libros prohibidos recogidos por la Superintendencia General de Policía *por ir en contra de la santidad del Dogma, la pureza de la disciplina, las prerrogativas de la Corona, la regularidad de las costumbres y el repo-*

¹⁰¹ AHN, Consejos, L-3765.

¹⁰² *Ibidem*, artículo 3 del Reglamento.

¹⁰³ AGP, Papeles Reservados, Tomos 66 y 67. HINOJAL AGUADO, Diego, "Instrumentos de Represión de la Masonería en el reinado de Fernando VII", en José Leonardo Ruiz Sánchez e Yván Pozuelo Andrés, (Coord.), *La Masonería. Mito e Historia en el III Centenario de la Fundación de la Masonería Moderna*, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla, 2020, Tomo I, págs. 107-113.

so de los españoles. Además, certificaba la pertenencia a cualquiera de las familias constitucionales en los expedientes que realizaban las Juntas de Purificación que se formaron para extirpar a los elementos liberales de la administración. Y no solo del Estado, Ayuntamientos, Ejército, etc., sino que también se atendió a cualquier tipo de empleo que pudiera ejercer influencia sobre la sociedad¹⁰⁴.

Hubo purificaciones sobre conducta política durante la Guerra de la Independencia y primera parte del reinado de Fernando VII. Sin embargo, las purificaciones que comenzaron durante la Regencia en 1823 y que continuaron de forma renovada con la liberación del Rey, son las que nos llaman la atención por su “especial” transcendencia. Porque se tomaron medidas para la separación y reposición de todos los empleados de la administración del Estado, para volver a la situación anterior al *atentado cometido en 7 de marzo de 1820, quedando también sin efecto los honores conseguidos desde aquella fecha, cualquiera que sea su consideración*.

Con la restauración del monarca, los Consejos repuestos se encargarían de purgar sus estructuras, mientras que *la purificación de los demás empleados en cualquiera otro ramo de administración civil del Estado correrá en Madrid a cargo de una junta dependiente del Consejo de Hacienda*¹⁰⁵. El 22 de septiembre de 1823 se expidió una *Orden circular del Ministerio de Hacienda, para que en todas las provincias se instalen las Juntas de Purificaciones de los empleados civiles*. El 30 de septiembre se otorgó una mínima garantía en Orden del Ministerio de Gracia y Justicia exponiendo que *el juicio de purificación en segunda instancia, siendo negativa, tenga cumplida ejecución la separación del interesado del destino que servía*¹⁰⁶. El juicio de purificación en segunda instancia se elevaba al Consejo correspondiente que era presidido por el monarca, como más alto tribunal de cada ramo.

Finalmente, las purificaciones cesaron el 30 de octubre de 1832 a través de las aclaraciones del decreto de amnistía que había sido decretada por la Reina gobernadora el 20 de octubre de 1832, para reca-

¹⁰⁴ BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Bernabé, “Las purificaciones de maestros de primeras letras y preceptores de gramática en la reforma de Fernando VII”, *Revista de la Educación*, N.º 2, 1983, págs. 249-254.

¹⁰⁵ MARTÍN DE BALMASEDA, *Decretos de la Junta provisional, Regencia del Reino*, op. cit., págs. 50-52, *Real Decreto de la Regencia, en el que se establece varias reglas sobre la separación y reposición de empleados de los diferentes ramos de la administración pública*, de 27 de junio de 1823.

¹⁰⁶ *Ibidem*, págs. 123 y 139 respectivamente

bar apoyos frente a quienes intentaban entregar la corona al infante Don Carlos por la enfermedad del Rey¹⁰⁷.

En los archivos encontramos numerosos ejemplos sobre juicios de purificación que tuvieron que afrontar quienes quisieran continuar al servicio del Rey. Entre los expedientes consultados, llaman la atención los de purificaciones que, paradójicamente se pueden encontrar completos en el Archivo General Militar de Segovia dentro de expedientes personales de militares de alta graduación. Donde existen varios ejemplos que incluyen el informe/cuestionario de imprenta sobre la conducta política del interesado, en el que se enumeran las diversas conductas políticas reprobables con espacio para su contestación, seguidas del enigmático mensaje en el que llama la atención: *en la inteligencia que la Junta tiene tomadas las medidas mas eficaces para que este informe permanezca reservado hasta que a su debido tiempo se queme, como se ha practicado con todos los expedientes ya concluidos, y se ejecutará igualmente en lo sucedido*¹⁰⁸.

Por lo que, de la misma forma que ocurre con la documentación de instituciones judiciales sobre causas políticas, en la que, a pesar de los expurgos, podemos encontrar ejemplos significativos de los *usos* del absolutismo. Las purificaciones también nos aportan ejemplos de esa arbitrariedad interesada que sirvió para que Fernando VII se perpetuara contra todo pronóstico en el trono hasta su muerte natural.

IV. CONCLUSIONES

La transformación que la sociedad estaba experimentando, desde vasallos de un reino hasta ciudadanos de una nación, sufriendo rápidos avances y retrocesos en el camino, y en un estado de guerra casi permanente, modificó la percepción general sobre la disidencia o delincuencia política, rebajando su consideración criminal en los textos decimonónicos¹⁰⁹.

La crisis del Estado Absoluto se refleja en la administración de la Justicia Real, y en las dificultades que presenta para hacer frente a los *nuevos delitos políticos*. Dificultades marcadas por su lentitud, frag-

¹⁰⁷ NIEVA, *Decretos Fernando VII*, 1833, op. cit., pág. 232.

¹⁰⁸ AGMS, Celebres, Caja 160, Exp. 5, Teniente General Príncipe de Anglona, Pedro Téllez Girón.

¹⁰⁹ FIESTAS, op. cit., págs. 73-75, justificando el caso contrario también existen obras, como la de PINTOS VIEITES, María Carmen, *La política de Fernando VII entre 1814 y 1820*, Universidad de Navarra, Pamplona, 1958, en la que se afirma que la represión de los liberales no fue dura en los inicios del reinado.

mentación y por las desigualdades existentes. Aunque las *Justicias* no tuvieran que motivar sus sentencias, pudieran utilizar la confesión mediante tortura y la delación como medios de prueba. Además de contar con un gran catálogo de las penas más rigurosas y ejemplarizantes. Por todo ello, el monarca necesitó una legislación represiva *a la carta* en los momentos difíciles de su reinado, para conseguir el pronto castigo de sus opositores. Donde los procesos criminales adquieren un aire inquisitorial, y la delación se convierte en el principal motivo de conocimiento de las causas.

El Rey necesitado de celeridad en los castigos también encargó la persecución de liberales a las jurisdicciones especiales del Antiguo Régimen, la eclesiástica y la militar. Los monarcas absolutos españoles a través de sus regalías se servían del control de las mentalidades que la Iglesia Católica venía ejerciendo con gran éxito. La Inquisición se encargaba del control de elementos y de escritos discordantes con la religión y el carácter sagrado de la monarquía. Sin embargo, la Inquisición del siglo XVIII ya no era el temido tribunal de los siglos anteriores y su restauración en 1814 no produjo los efectos esperados por Fernando VII.

Por lo que cuando quiso dar mayor rapidez a los procesos, se servirá de la mucho más expeditiva jurisdicción militar y sus Comisiones. También la jurisdicción militar se convertirá en recurso fundamental cuando los liberales ostenten el poder. La debilidad del régimen liberal desde sus inicios marcará el protagonismo que adquirieron los militares en su defensa, como se advierte en la legislación, convirtiendo los delitos políticos en delitos de Estado. La persecución de los delinquentes siempre requirió del auxilio de fuerza militar, lo que explica el protagonismo del Ejército en materias de orden público hasta no hace mucho tiempo.

La concentración del poder en manos del Rey, centró el protagonismo de la represión en su gabinete, principalmente la Secretaría de Gracia y Justicia y su titular Francisco Tadeo Calomarde, que al hacerse con el control total de la Superintendencia General de Policía del Reino y gracias a la extensión de sus redes de información, consiguió desarticular las intentonas liberales organizadas entorno al año 1830, animadas por la revolución en Francia, dando una imagen posterior muy negativa frecuentemente plasmada en la historiografía.

Finalmente hay que matizar, porque nos encontramos en el estudio de una etapa compleja y extensa, con diversas administraciones e instituciones operando al mismo tiempo, con graves conflictos de competencias, influencias internas y externas sobre el monarca,

etc., para la que la historiografía ha sido muy crítica, dejándonos una visión muy negativa. Tampoco se puede olvidar la represión de los delincuentes políticos por la *vía administrativa* de las purificaciones, que se produce sobre todo en la llamada *década ominosa*, y que produjo una revisión sin precedentes de las conductas políticas durante el Trienio Liberal de militares, empleados de los diversos ramos, eclesiásticos, profesores, universitarios, colegiales, maestros de primeras letras, etc., para separar a las ovejas blancas de las *negras* liberales.

V. FUENTES

V.A. Fuentes Archivísticas

Archivo General de Palacio (AGP).

Archivo General Militar de Segovia (AGMS).

Archivo General Real Chancillería de Valladolid (ARCHV).

Archivo Histórico Nacional (AHN).

Archivo Histórico Provincial de Álava (AHPA).

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ).

Arquivo do Reino de Galicia (ARG).

Arxiu Regne de Mallorca (ARM).

V.B. Fuentes Bibliográficas

ALCALÁ GALIANO, Antonio, *Memorias*, Imprenta Enrique Rubiños, Madrid, 1886, Tomo I.

ALMIRANTE, José, *Diccionario Militar*, Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, Tomo I.

ALONSO TEJADA, Luis, *Ocaso de la Inquisición en los últimos años del reinado de Fernando VII*, Zero, Madrid, 1969.

ALVARADO PLANAS, Javier, “La Ilustración y la humanización del Derecho Penal”, Alvarado, Javier y Martorell, Miguel (Coord.), *Historia del delito y castigo en la Edad Contemporánea*, UNED-Dykinson, Madrid, 2017.

— *Masones en la Nobleza de España*, La esfera de los libros, Madrid, 2016.

- ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús, “Invasión francesa, Gobierno Intruso. Los fondos de la Guerra de la Independencia en el Archivo Histórico Nacional”, *Cuadernos de Historia Moderna. Universidad Complutense de Madrid*, N.º 37, 2007.
- ARTOLA, Miguel, *La España de Fernando VII*, RBA, Madrid, 2005.
- *Los afrancesados*, Alianza Editorial, Madrid, 2008.
- BARBASTRO GIL, Luis, *Los Afrancesados. Primera emigración política del siglo XIX español (1813-1820)*, CSIC, Madrid, 1993.
- BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Bernabé, “Las purificaciones de maestros de primeras letras y preceptores de gramática en la reforma de Fernando VII”, *Revista de la Educación*, N.º 2, 1983.
- BASCUÑÁN AÑOVER, Óscar, “Historia del delito político en la España contemporánea (1808-1977)”, Alvarado, Javier y Martorell, Miguel (Coord.), *Historia del delito y castigo en la Edad Contemporánea*, UNED – Ed. Dykinson, Madrid, 2017.
- BAYO, Estanislao de Kostca, *Historia y vida de Fernando VII de España*, Imprenta de Repullés, Madrid, 1842, Tomo III.
- BOIX, Vicente, *Sistema penitenciario del presidio correccional de Valencia*, Imprenta del Presidio, Valencia, 1850.
- CARRUESCO, Alejandro y VARAS, Fernando, “La justicia oscense durante el reinado de Fernando VII: alcaldes mayores y gobernadores militares y políticos”, *Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses*, N.º 128, 2018.
- CASTELLANO, Juan Luis y GÓMEZ GONZÁLEZ, Inés, “Reflexiones sobre la Justicia en el Antiguo Régimen a propósito de unas cartas a Villena”, *Chronica Nova*, N.º 22, 1995.
- Colección de Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811*, Imprenta Nacional, Madrid, 1813, Tomo I.
- Colección de Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de Mayo de 1812 hasta 24 de Febrero de 1813*, Imprenta Nacional, Madrid, 1820, Tomo III.
- Colección de los Decretos y Ordenes Generales de la Primera Legislatura de las Cortes ordinarias de 1820 y 1821*, Imprenta Nacional, Madrid, 1821, Tomo VI.
- Colección de Decretos y Órdenes Generales expedidos por las Cortes ordinarias de 1820 y 1821*, Imprenta Nacional, Madrid, 1821, Tomo VII.

“Documentos para la Historia moderna de España. Ordenanza del superintendente general de policía en Madrid de 4 de octubre de 1824”, *Ocios de Españoles emigrados*, N.º 10, 1825.

DOMÍNGUEZ NAFRÍA, Juan Carlos, “El trato a los Afrancesados en la Legislación de las Cortes de Cádiz” en Javier Alvarado Planas (Coord.), *Estudios Sobre Historia de la Intolerancia*, Sanz y Torres, Madrid, 2011.

ESTEBAN DE VEGA, Mariano, “Estado y Administración Central en el reinado de Fernando VII”, *Historia Contemporánea*, N.º 17, 1998.

FERRER BENIMELI, José Antonio, *La Masonería Española en el Siglo XVIII*, Siglo XXI, Madrid, 1986.

FIESTAS LOZA, Alicia, *Los Delitos Políticos (1808-1936)*, Gráficas Cervantes, Salamanca, 1977.

FONTANA, Josep, *De en medio del tiempo*, Crítica, Barcelona, 2019.

Gazeta Extraordinaria de Madrid, N.º 33, 09-04-1808.

Gazeta Extraordinaria de Madrid, N.º 107, 24-08-1824.

DUFOUR, Gerard, “¿Cuándo fue abolida la Inquisición en España?”, *Cuadernos de Ilustración y Romanticismo*, N.º 13, 2005.

HERRERO, Cesar, *La Justicia Española en la crisis del Poder Absoluto*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1989.

HINOJAL AGUADO, Diego, “La Policía de Fernando VII y la persecución de la Masonería”, en José Antonio Ferrer Benimeli, coord., *La Masonería Española, Represión y Exilios*, CEHME, Zaragoza, 2010, Tomo II.

— “Instrumentos de Represión de la Masonería en el reinado de Fernando VII”, en José Leonardo Ruiz Sánchez e Yván Pozuelo Andrés, (Coord.), *La Masonería. Mito e Historia en el III Centenario de la Fundación de la Masonería Moderna*, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla, 2020, Tomo I.

LA PARRA LÓPEZ, Emilio, *Fernando VII. Un rey deseado y detestado*, Tusquets, Barcelona, 2018.

LA PARRA, Emilio y CASADO, María Ángeles, *La Inquisición en España. Agonía y abolición*, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2013.

MARTÍNEZ DE VILLAUURUTIA, Wenceslao, *Fernando VII Rey Absoluto*, Librería Beltrán, Madrid, 1931.

— *Fernando VII Rey Constitucional*, Librería Beltrán, Madrid, 1922.

MARTÍN DE BALMASEDA, Fermín, *Decretos del Rey Don Fernando VII*, Imprenta Real, Madrid, 1818, Tomo I.

— *Decretos del Rey Don Fernando VII*, Imprenta Real, Madrid, 1819, Tomo II.

— *Decretos del Rey Don Fernando VII, o Colección de Reales Resoluciones expedidas por los diferentes ministerios y consejos desde 1.º de enero de 1820 hasta el 7 de marzo inclusive del mismo año, día en que S. M., a impulso de una facción impia y escandalosa, fue privado de su preciosa libertad*, Imprenta Real, Madrid, 1823.

— *Decretos de la Junta provisional, Regencia del Reino y los expedidos por su Magestad desde que fue libre del Tiránico Poder Revolucionario, comprensivo al año de 1823*, Imprenta Real, Madrid, 1824, Tomo VII.

MARTÍNEZ RUÍZ, Enrique, “Policía, Delincuencia Política y Corrupción en Madrid a finales del siglo XVIII”, *Madrid. Revista de arte, geografía e historia*, N.º 8, 2006.

— *La Seguridad Pública en el Madrid de la Ilustración*, Ministerio del Interior, Madrid, 1988.

— *Policías y Proscritos. Estado, Militarismo y Seguridad en la España Borbónica (1700-1870)*, Editorial Actas, Madrid, 2014.

MASFERRER Domingo, Aniceto, “La codificación del Derecho penal en España. Tradición e influencias extranjeras: su contribución al proceso codificador”, ALVARADO, Javier y MARORRELL, Miguel, coord., *Historia del delito y castigo en la Edad Contemporánea*, UNED – Ed. Dykinson, Madrid, 2017.

MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino, *Historia de los Heterodoxos Españoles*, Homo Legens, Madrid, 2011, Tomo II.

MORAL RONCAL, Antonio Manuel, *¡El enemigo en Palacio! Afrancesados, liberales y carlistas en la Real Casa y Patrimonio (1814-1843)*, Universidad de Alcalá, Madrid, 2005.

MORALES RUIZ, Juan José, “La represión de la Masonería durante el reinado de Fernando VII”, en Isidro Sepúlveda y Blanca Buldaín, coords., *La Iglesia Española en la Crisis del Antiguo Régimen*, UNED, Madrid, 2003.

— *El Discurso Antimasónico en la Guerra Civil Española (1936-1939)*, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2001.

- MORENO ALONSO, Manuel, "La Fabricación de Fernando VII", *Ayer*, N.º 41, 2001.
- NIEVA, Josef María de, *Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII*, Imprenta Real, Madrid, 1824, Tomo VIII.
- *Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII*, Imprenta Real, Madrid, 1825, Tomo IX.
- *Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII*, Imprenta Real, Madrid, 1826, Tomo X.
- *Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII*, Imprenta Real, Madrid, 1828, Tomo XII.
- *Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII*, Imprenta Real, Madrid, 1831, Tomo XV.
- *Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII*, Madrid, Imprenta Real, 1833, Tomo XVII.
- ORTEGO GIL, Pedro, *Entre Jueces y Reos. Las postrimerías del Derecho penal absolutista*, Dykinson, Madrid, 2015.
- PEGENAUTE GARDE, Pedro, *Represión Política en el Reinado de Fernando VII, Las Comisiones Militares (1824-2825)*, Universidad de Navarra, Pamplona, 1974.
- PINTOS VIEITES, María Carmen, *La política de Fernando VII entre 1814 y 1820*, Universidad de Navarra, Pamplona, 1958.
- RÚJULA, Pedro, *Contrarrevolución. Realismo y Carlismo en Aragón y el Maestrazgo, 1820-1840*, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1998,
- SIMAL, Juan Luis, *Emigrados. España y el exilio internacional, 1814-1834*, CEPC, Madrid, 2012.
- TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, "Derecho penal de la Monarquía absoluta (S. XVI, XVII y XVIII)", *Obras Completas*, CEPC, 1997, Tomo 1.
- TURRADO VIDAL, Martín, *Estudios sobre Historia de la Policía*, Ministerio del Interior, Madrid, 1991, Tomo I.
- VÉLEZ, Rafael de, *Apología del Altar y del Trono*, Imprenta de Cano, Madrid, 1818, Tomo I.